

## PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN CASTELLANO

*Santiago Álvarez Cantalapiedra*

Director de FUEM Ecosocial

El nuevo siglo empezó mal. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 hemos asistido a un grave retroceso en el ejercicio y la protección de muchos derechos y libertades. En un primer momento, cuando se encendieron los ardores guerreros, esta involución se mostró sobre todo en el plano internacional: el 7 de octubre de 2001, aviones militares estadounidenses y británicos iniciaron sus incursiones mortíferas sobre Afganistán, dando comienzo a la operación «Justicia Infinita», después «Libertad Duradera», inaugurando la llamada «Guerra contra el terrorismo». Poco tiempo después, en la primavera del año 2003, con el arranque de la ocupación, se culminó la destrucción de Irak, meticulosamente planificada durante doce años y sostenida con un embargo tras la «Operación Tormenta del Desierto» en enero de 1991. Desde entonces hemos visto cómo la defensa retórica de los derechos humanos ha servido de cobertura para violarlos de manera sistemática, justificando las intervenciones militares bajo el manto del «humanitarismo». La injerencia imperialista ha encontrado en el discurso de los derechos humanos un recurso ideológico similar a lo que representó en la época colonial la «misión civilizatoria» del Occidente europeo. Guantánamo o Abu Ghraib, y las innumerables operaciones militares que no han dejado de sucederse desde entonces, representan la mejor muestra de ello.

Pero la involución en los derechos y libertades fundamentales no se ha producido únicamente en las relaciones internacionales, donde en realidad nunca gozaron de buena salud. El retroceso de las libertades democráticas ha sido especialmente intenso en el interior de las sociedades. En casi todos los países occidentales, tras la promulgación de la Patriot Act el 26 de octubre de 2001, con el argumento de la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado en la «Guerra contra el terrorismo», se han roto muchos de los equilibrios y garantías sobre los que descansan las libertades y los derechos de la ciudadanía. Su irrupción en el ordenamiento jurídico ha implicado tener que elegir entre mayores cotas de seguridad (leída siempre en un sentido restrictivo, como mero orden público) o mayor protección de las libertades fundamentales de

los ciudadanos. Ante esta deriva, Giorgio Agamben ha advertido de que el «estado de excepción» tiende a presentarse cada vez más como el paradigma de gobierno dominante en las prácticas de los Estados contemporáneos.

La racionalidad económica neoliberal muestra también los límites de la democratización capitalista. Cuando el motor del sistema (la tasa ganancia) se gripa y la dinámica de acumulación se ve comprometida, cualquier arreglo institucional democrático que pudiera haberse conseguido es irremediabilmente cuestionado. Entonces, cuando eso ocurre, el impulso del proceso democrático queda frenado (cuando no revertido) para restablecer las exigencias del imperativo económico y el Estado deja de ser la encarnación del gobierno popular para pasar a convertirse en un sistema de gestión de negocios. Para relacionar este reflujo de las libertades democráticas con la crisis capitalista en curso es fundamental comprender cómo han sido reinterpretadas en la práctica estatal las nociones de libertad y seguridad. Si hasta la llegada de los gobiernos neoliberales a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, el Estado social optaba por recortar la libertad de mercado ofreciendo en su lugar un amplio abanico de servicios públicos universales que garantizaban derechos sociales y libertades democráticas, en las últimas décadas el Estado neoliberal ha ido desmontando los sistemas públicos de protección social, abriendo con ello la inseguridad existencial a la libertad absoluta de un mercado controlado por el capital, reconvirtiéndose de paso en mero distrito policial obsesionado por el orden y el mantenimiento del statu quo. En la actualidad el Estado neoliberal parece estar evolucionando hacia un Estado securitario, que en un contexto de deterioro ecológico, globalización desigual y profunda crisis social responde al malestar de la ciudadanía endureciendo el aparato punitivo y desarrollando leyes que ponen en cuestión libertades y garantías legales.

El desarrollo de las tecnologías de la información no parece que esté atenuando este proceso, más bien todo lo contrario. Las prácticas masivas de vigilancia y espionaje desveladas por Edward Snowden a partir de la filtración de documentos secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU representan otro capítulo de la larga serie dedicada a la involución general en materia de derechos y libertades fundamentales. En este asunto no todo resulta novedoso: conocemos desde hace tiempo la obsesión del Leviatán moderno por mantener controlados a sus ciudadanos recurriendo a los más diversos métodos (recopilación de datos biométricos, videovigilancia, escuchas, etc.); lo verdaderamente nuevo no es siquiera que la vigilancia alcance a toda la población mundial o que la capacidad para recopilar y procesar toda esa información parezca no conocer límites. Lo más llamativo en esta ocasión ha sido la abierta disposición que han mostrado las grandes empresas tecnológicas (Microsoft, Facebook, Google) para convertirse en cómplices de la injerencia ejercida por los gobiernos. Seguramente es una manifestación más de cómo bajo el «orden neoliberal-securitario» los poderes económicos y políticos han terminado estrechamente asociados, y de cómo en esa fusión la empresa privada se torna más política a medida que el Estado se privatiza para favorecer a una clase dominante integrada por influyentes empresarios.

En este contexto, con un poder corporativo cada vez más fuerte y unos Estados que han ido sustituyendo sus funciones de protección, regulación y redistribución por las impropias de un gendarme con amplias potestades represivas y punitivas, invade el escenario con todas sus amenazantes consecuencias el cambio climático. De momento, aunque se hayan disparado todas las alarmas, poco se ha hecho. En realidad, ya es tarde para evitar muchas de sus consecuencias. Aunque decidiésemos cambiar radicalmente nuestro modo de producción y modelos de consumo, viviremos en un mundo marcado por los efectos de la desestabilización del clima. La humanidad ha entrado en la «era de las consecuencias».

La incógnita está en cómo vamos a responder a todas estas consecuencias inevitables que surgen de la intersección entre los efectos sociopolíticos del cambio climático y las implicaciones que se desprenden sobre la seguridad de las naciones y su política exterior. De lo que se va viendo, no cabe augurar nada bueno. Este libro lanza la inquietante advertencia de que asistimos a una adaptación militarizada al cambio climático. Los efectos del calentamiento global son contemplados como riesgos políticos y de seguridad nacional desde el prisma exclusivo de los intereses dominantes en cada país. De ahí que la adaptación militarizada al cambio climático no signifique otra cosa que la respuesta a esas amenazas con ejércitos y fuerzas de seguridad privadas con la doble misión de fortificar archipiélagos de prosperidad en medio de océanos de miseria y expulsar de sus hábitats a una fracción de la humanidad calificada de sobrante o prescindible. El Papa Francisco lo viene denunciando reiteradamente: vivimos instalados en una «cultura del descarte» en la que determinados grupos de seres humanos (así como el resto de las especies) son vistos como elementos desechables cuando no aportan o entorpecen la cuenta de resultados. La «era de las consecuencias» podrá devenir así en la «era de las expulsiones masivas» para garantizar la única forma de acumulación posible en un planeta que se ha topado con los límites naturales: la acumulación por desposesión.

Esta dinámica solicita a gritos un discurso legitimador que se está construyendo siguiendo una secuencia narrativa de dos momentos. El primero refleja la renuncia a intervenir sobre las causas, volcándose sobre los efectos. Las implicaciones de esta opción no se pueden negar: si oscurecemos las causas raíces y solo prestamos atención a que la desestabilización del clima agudizará las tensiones internas de una sociedad y las rivalidades entre países, el cambio climático tenderá a ser tratado como un asunto de seguridad nacional que precisa la mencionada «adaptación militarizada». El segundo movimiento que completa este discurso legitimador arranca del anterior: en ese contexto de riesgos y amenazas donde el cambio climático es observado como un problema de seguridad, los Estados y las corporaciones privadas alientan el miedo y la inseguridad para justificar lo injustificable, al tiempo que esa percepción de riesgo les permite aprovecharse de la situación para perpetuar la injusticia. Algo que se observa ya en la actualidad con el despliegue de la seguridad global protagonizada por un enjambre de empresas privadas que ofrecen una variedad

de servicios (logística militar, vigilancia de fronteras, asesoría antiterrorista, capacitación y suministro de mercenarios, etc.) que permiten que la gestión policial y militar de la catástrofe se convierta en un suculento negocio. Esta doble opción, a favor de los efectos ocultando las causas y hacia una noción de seguridad cada vez más restringida y privatizada, permite comprender la coincidencia de otro modo misteriosa entre un liberalismo absoluto en el campo de la economía y un control securitario sin precedentes sobre la sociedad.

¿Qué podemos hacer? El libro nos ofrece numerosas pistas. Por ejemplo, para empezar, sería muy conveniente contemplar el cambio climático como lo que verdaderamente es: un conflicto ecosocial de carácter global que debe ser abordado en términos de justicia social y no de orden público. Solo es posible hacerlo si ponemos el foco de la atención en las causas y no solo en los efectos; a fin de cuentas, el cambio climático solo es la fiebre de una enfermedad más grave. En segundo lugar, debemos desenmascarar a aquellos que habiendo provocado con su codicia la crisis climática buscan beneficiarse también de sus consecuencias. Dos líneas que habrá que desarrollar con inteligencia y sentido de la justicia si no deseamos un futuro militarizado y corporativizado en el inevitable trance que se nos presenta ante las consecuencias del cambio climático.

La edición en español de este libro no hubiera sido posible sin la convergencia de fuerzas y voluntades entre organizaciones afines que luchan por la misma causa. Al interés mostrado por FUHEM para sacar esta versión en castellano respondieron con entusiasmo el grupo de investigación de la Universidad del País Vasco Parte Hartuz, Ekologistak Martxan, el Centre Dèlas D´Estudis per la Pau, Novact y Ecologistas en Acció. Nuria del Viso y África Planet, ambas de FUHEM, son las responsables de que esas complicidades surgieran y han estado en todo momento, con gran dedicación y profesionalidad, al cuidado de los detalles de la edición. Aunque los libros empiezan siendo de los autores, terminan formando parte de todas las personas que, bien como editoras o lectoras, los hacen propios.

Madrid, 2 de mayo de 2017